

La agricultura latinoamericana en la era de la globalización y de las políticas neoliberales: Un primer balance

FRANCISCO GARCÍA PASCUAL

Departamento de Geografía y Sociología
Universitat de Lleida
garcia.pascual@geosoc.udl.es

Resumen

En este trabajo ponemos de manifiesto que la agricultura en América Latina y el Caribe ha mostrado un doble rostro en términos de su desempeño en estas dos postreras décadas, coherentemente con la lógica del sistema. Por una parte, en algunos territorios y en algunos subsectores se han producido avances tanto en términos de su “modernización” —entiéndase capitalización— del aparato productivo como en su inserción en el mercado urbano interno y en el mercado internacional. Y, por otro, si observamos detenidamente los principales índices que miden los resultados de la actividad agraria —productividad, balanza comercial, precios implícitos en la producción y en la exportación o nivel de ingresos de los agricultores— podemos comprobar fehacientemente que la brecha que ha separado históricamente a la agricultura latinoamericana de los sectores agrarios de los Estados Unidos o de la Unión Europea es cada vez mayor. Es más, los grandes problemas que atenazaban al mundo agrario en América Latina a principios de los ochenta (baja productividad, distribución desigual de los recursos productivos, exclusión social, desequilibrios territoriales, amén de la dependencia tecnológica y de la dependencia financiera del sector) siguen siendo la realidad mayoritaria después de dos décadas de ajuste estructural neoliberal.

PALABRAS CLAVE: *agricultura, ajuste estructural, América Latina, desarrollo.*

Presentación

En este trabajo pretendemos ofrecer un balance del impacto de la globalización y de la implementación de políticas neoliberales —concretado en lo que se ha denominado como ajuste estructural— sobre la agricultura de América Latina en las dos décadas que median entre 1980 y la actualidad. Años convulsos que nacieron bajo el síndrome de la crisis económica, cuya visualización más evidente en el continente latinoamericano fue la eclosión del problema de la deuda externa y el incremento espectacular de la pobreza. Y que hoy, a principios del 2003, están definidos por una fase de expansión económica del capitalismo profundamente inestable y volátil, bajo la égida de la reestructuración del sistema y de la internacionalización de la toma de decisiones políticas. En este sentido, somos conscientes de las dificultades obvias de establecer un balance global de una realidad tan heterogénea como es el agro latinoamericano, y más cuando habría que analizar los diversos matices que en cada país y en cada coyuntura han tenido las políticas agrarias y las propias políticas económicas implementadas. Por ello, hemos optado por aproximarnos al estudio de cuatro ítems que creemos son suficientemente significativos para ayudar a interpretar cual ha sido el desempeño del sector agrario. Nos referimos a las estructuras productivas, a la productividad, al comercio exterior y a los niveles de vida en las áreas rurales.

En este estudio vamos a poner de manifiesto que la agricultura latinoamericana ha mostrado un doble rostro, coherentemente con la lógica del sistema. Por una parte, en algunos territorios y en algunos subsectores se han producido avances tanto en términos de su “modernización” del aparato productivo —entiéndase capitalización— como en su inserción en el mercado urbano interno y en el mercado internacional. Aunque en numerosos casos esos avances se han focalizado en aquellas medianas y grandes explotaciones que ya contaban con un mayor grado de inserción en el mercado, por lo que la dualización estructural del sector agrario latinoamericano no sólo no se ha modificado, sino que estos años de neoliberalismo han visto como la misma se ha consolidado. Y, por otro, si observamos detenidamente los principales índices que miden los resultados de la actividad agraria —productividad, balanza comercial, precios implícitos en la producción y en la exportación, nivel de ingresos de la mayoría de los agricultores, etc.— podemos comprobar fehacientemente que la brecha que ha separado históricamente a la agricultura latinoamericana de los sectores agrarios de los Estados Unidos o de la Unión Europea es cada vez mayor. Es más, los grandes problemas que atenazaban al mundo agrario en América Latina a principios de los ochenta (baja productividad, distribución desigual de los recursos productivos, exclusión social, desequilibrios territoriales y dependencia tecnológica y dependencia financiera) siguen siendo la realidad mayoritaria después de dos décadas de ajuste estructural neoliberal.

Las bases políticas del modelo agrario latinoamericano

El elemento que ha guiado el transcurso de estas dos intensas décadas, es la configuración de las ideas neoliberales *presuntamente* como el único corpus de política económica y social que es posible implementar en el actual estadio de desarrollo del capitalismo. Neoliberalismo que, aún reconociendo la pluralidad de interpretaciones y de

actuaciones que dicho término engloba, a principios de los años ochenta se implementó bajo el paraguas del *ajuste estructural*, y, hoy en día, se lleva a término bajo el paraguas de la *globalización*. Sin embargo, en el fondo de lo que estaríamos hablando es de que dicho ajuste aplicado como solución a la crisis de inicios de la década de los ochenta, se ha convertido en una especie de *ajuste estructural permanente, que va adaptándose a los cambios en las coyunturas económicas y políticas, sin alterar en lo sustancial sus planteamientos centrales*. Ahora bien, ante la contestación social creciente y después de la experiencia de los años anteriores en el terreno de las tensiones sociales que dichas políticas comportaron (y la propia constatación de que la aplicación del ajuste estructural no había tenido el éxito esperado por sus promotores), diversos organismos internacionales, gobiernos y académicos han remozado estos planteamientos introduciendo un lenguaje políticamente “más correcto” en la segunda mitad de los años noventa.¹ Pese a lo cual insistimos en ello, las líneas maestras de tal política neoliberal seguirán inalterables.

En el terreno agrario, esas políticas neoliberales han tendido a consolidar un modelo de desarrollo capitalista del agro que, como acertadamente ha señalado B. Rubio (2001: 68-78), se está configurando principalmente en torno a dos elementos: el dominio de la agroindustria multinacional que produce alimentos elaborados para el mercado interno y externo (que impulsa una forma de subordinación sobre los productores rurales que consiste en imponer precios bajos a los bienes que obtienen y que dichas empresas utilizan como insumos), y el dominio de la agroindustria exportadora (que impulsa cultivos muy rentables pero cuyos protagonistas son un reducido grupo de grandes empresarios, que pueden disponer del capital necesario para invertir en el uso intensivo de tecnología y de maquinaria que dichos cultivos requieren). Modelo que se completa con dos elementos más. Por una parte, es un modelo sumamente flexible que permite la coexistencia de grados muy diversos de inserción de los diferentes tipos de agricultores en los mercados nacionales e internacionales. Y, por otro, es un modelo en el cual el sector agrario desempeña una cuádruple función para la formación social en la que se integra como productor de materias primas para la industria agroalimentaria —y cada vez en menor medida como productor directo de alimentos para la propia familia del agricultor y para los mercados urbanos próximos—; como comprador de materias primas, maquinaria y tecnología de origen industrial; como suministrador de fuerza de trabajo para la industria y los servicios urbanos —sean estos entes urbanos nacionales o internacionales—; y, finalmente, en algunos sectores y en algunos países puede desarrollar una función como foco de acumulación de capital que, a través de las entidades financieras, puede dirigirse hacia el resto de sectores económicos.

Acorde con este modelo, el ajuste estructural en la agricultura (Weeks, 1995; Sopor, 2000) se ha construido en estas décadas a través de la aplicación de una serie de medi-

1. Así, a partir de entonces se hablará de crecimiento con equidad, se arbitrarán fórmulas para que se escuche la “voz de los pobres”, se revalorizará el papel de las organizaciones indígenas, se institucionalizará la función social de las ONG, la cuestión del género y del respeto al medioambiente alcanzará un enorme predicamento y se convertirá en un elemento transversal en cualquier planteamiento o acción política, y se promoverán las organizaciones de base y el desarrollo local.

das conducentes a la desaparición de cualquier atisbo de reforma agraria que comporte la distribución de los recursos productivos. Asimismo, ha promovido la reducción del papel normativo del Estado, la disminución significativa del apoyo público directo e indirecto al sector agropecuario y la liberalización comercial; medidas a las que hemos de añadir el brindar facilidades para la penetración de capital extranjero tanto en la actividad agraria como en la industria agroalimentaria, y el impulsar las reformas legales que faciliten la libre compra-venta de los recursos agropecuarios y forestales. El estandarte de estos años lo ha constituido, por encima de todo, la liberalización de los mercados internacionales de productos agropecuarios a través de los diferentes acuerdos multilaterales (las Rondas comerciales auspiciadas por la OMC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Comunidad Andina o Mercosur, por ejemplo), y mediante la presión ejercida por organismos internacionales y/o grandes potencias sobre algunas economías nacionales para forzar la apertura de sus mercados internos (caso de las acciones impulsadas por el FMI, el Banco Mundial, los Estados Unidos o la propia Unión Europea). Sin embargo, como las condiciones estructurales de partida y los niveles de competitividad son muy desfavorables en el mercado internacional para la mayor parte de los agricultores latinoamericanos, esta liberalización está conduciendo a que emerja un crisol de fuertes tensiones sociales en el campo (son buenos ejemplos de las mismas las movilizaciones campesinas masivas en Bolivia o en Ecuador, el MST en Brasil o los zapatistas en México).

En este sentido, tanto numerosos gobiernos latinoamericanos como destacados organismos internacionales van a constatar, por una parte, que el ajuste estructural en el ámbito agropecuario puesto en marcha en los años ochenta estaba consiguiendo un relativo aumento de la actividad y una intensificación de las relaciones con el sector industrial. Pero, por otra parte, no podían negar la clamorosa evidencia de que la mayoría de los agricultores y, por ende, gran parte de los moradores rurales, seguían permaneciendo prisioneros de la pobreza² —y más cuando el mundo urbano no está demostrando capacidad de crear nuevos empleos en casi ningún país latinoamericano, si es que no son en la economía informal. Por ello, se promueven ¿novedosas? estrategias de modernización agraria y de desarrollo rural, que siguen asumiendo los preceptos neoliberales, pero que, al mismo tiempo, ponen de manifiesto que el mercado capitalista es imperfecto y que es necesaria una acción pública que aborde esa modernización agraria y ese desarrollo rural, supeditada, eso sí, al propio empuje de la iniciativa privada (De Janvry, 1989; 1994). Ahora, se hablará de mercado de tierras,³ de pluriactividad, de intensifi-

2. Serageldin y Johnson (2000: IX), dos altos responsables del Banco Mundial, reconocían esta situación contradictoria a principios de la nueva centuria.

3. Ello permite cambiar el epicentro del debate desde la distribución entre los distintos agentes sociales de los recursos productivos, en este caso la tierra, a la necesidad de articular mecanismos que faciliten la titulación y la propiedad privada efectiva de los mismos. Así, en este sentido, Vogelgesan (2000) señala significativamente que “no deberíamos centrarnos en la dicotomía falsa ente propiedad privada *versus* propiedad común. Lo que nos debería interesar es la distinción entre propiedad formal y posesión informal, y las distintas consecuencias sociales y económicas implicadas; o, dicho de una manera más precisa: la pregunta es si existe propiedad privada como una institución social aceptada, sea esta individual o común”.

cación del uso de tecnología y capital en el proceso productivo agrario, de una mayor interconexión con la agroindustria, de desarrollo rural sostenible e integrado, como de igual modo se arbitrarán mecanismos institucionales y financieros que favorezcan el reconocimiento de las organizaciones indígenas como agentes sociales del sector agrario, que faciliten el fortalecimiento de las estructuras sociales de base —el famoso capital social—, y que induzcan a un proceso generalizado de descentralización de la administración, entre otras medidas.

Estas últimas iniciativas, promovidas en América Latina por organismos como el Banco Mundial, la FAO, la CEPAL o el IICA especialmente en esta etapa post consenso de Washington (Bulmer-Thomas, 1998), han tenido un impacto positivo en algunos contextos locales y para algunas familias rurales (a través de la llegada de capital mediante los préstamos establecidos por dichos organismos, o por la transferencia de tecnología y conocimientos que dichas acciones implican, o por las facilidades dadas a la inserción de dichos agricultores o productores rurales en el mercado nacional e internacional). Pero, no es menos cierto que las estructuras productivas, las formas de organización de la actividad, las relaciones sociales que de ellas se derivan y los niveles de productividad y rentabilidad alcanzados no se han modificado sustancialmente en estas dos décadas de implementación del modelo neoliberal en la agricultura latinoamericana.

Estructuras agrarias en América Latina y el Caribe: el peso de la distribución inequitativa de los recursos productivos

Es probable que el debate en torno a la situación estructural de la agricultura latinoamericana haya terminado convirtiéndose, con el transcurso de los años, en uno de los puntos centrales de discusión en los ámbitos académicos —cuando estos focalizan su atención en la realidad económica de la región y en como encarrilarla hacia el “desarrollo”—; pero también en la propia sociedad —no olvidemos que la transformación de las estructuras a través de reformas legislativas se ha convertido en el *leit motiv* de numerosas organizaciones políticas. En todo caso, más allá del debate teórico y político, lo que es incuestionable es que en el mundo agrario latinoamericano coexisten estructuras heterogéneas, delimitadas, por una parte, por la presencia de una forma de organización y de unas relaciones sociales en principio no capitalistas, como sería el caso de Cuba, y, por otra, por una realidad poliédrica de estructuras agrarias capitalistas en el resto de naciones (con múltiples formas de propiedad y de dominio del capital y de los recursos: desde la comunal hasta las cooperativas privadas o estatales, desde los ejidos hasta las grandes corporaciones, o desde las pequeñas unidades familiares a los grandes latifundios).

En el período que abarcan los años 1950 y 1980 se sucedieron en América Latina una serie de reformas agrarias de calado e intenciones diversas (Thiesenhusen, 1989) aunque años antes ya se había producido una importante reforma agraria en México, así como en algún otro país. La gran mayoría de estas medidas legislativas nacieron al albor de la política norteamericana para América Latina, la famosa Alianza para el Progreso, y muy especialmente a partir de los acuerdos políticos tomados en el encuentro de

Punta del Este de 1961.⁴ Los diversos gobiernos latinoamericanos, presionados por las tensiones sociales que generaba la extrema desigualdad social existente en el campo, presionados por el “peligroso” ejemplo que suponía el éxito de la revolución cubana y, finalmente, presionados por la propia necesidad de modernizar sus sectores agrarios para con ello facilitar el desarrollo económico general, por uno u otros motivos, o por la conjunción de todos ellos, tuvieron que implementar reformas agrarias, cuyo sentido último dependía de la correlación coyuntural de fuerzas sociales y políticas de cada contexto nacional. Pero no es menos cierto que, como han apuntado diversos autores (Breton, 1994; Kay, 1999), esas medidas legislativas supusieron la emersión de un número importantísimo de nuevos pequeños propietarios agrarios pobres —porque el volumen de tierras al que accedían era reducido y de mala calidad en muchos casos, y porque la capacidad de obtener recursos y capital era mínima—, y, al mismo tiempo, aquellas sirvieron para facilitar la capitalización de la agricultura latinoamericana a través de las medianas y grandes explotaciones —que en el fondo era el principal objetivo que perseguían. Además, una parte de esos pequeños agricultores ante la imposibilidad de adaptarse a las exigencias de la economía de mercado acabarán convirtiéndose en proletariado rural, vendiendo su principal recurso: su fuerza de trabajo (Goddman y Redclift, 1982).

Las décadas de los años ochenta y noventa, a finales del siglo xx, han estado caracterizadas por la aplicación de nuevas reformas agrarias, cuyo sentido definitorio en última instancia ha estado marcado por la lógica del neoliberalismo económico y de la globalización.⁵ Esta etapa, tanto en la fase dominada por el Consenso de Washington como la delimitada por las políticas postconsenso, ha comportado la substitución como objetivo prioritario de las reformas agrarias (y de las políticas agrarias) del binomio contradictorio: distribución relativa del recurso tierra/modernización capitalista articulada en torno a las medianas y grandes explotaciones, para tener como eje vertebrador casi único el atribuir a las leyes del mercado la función central de asignar la distribución de los recursos entre los distintos agentes sociales que participan en esta actividad. De ello se va a derivar, evidentemente, que el sistema agrario latinoamericano siga pivotando en dichas medianas y grandes unidades de producción, mientras que las numerosísimas pequeñas explotaciones familiares se vean abocadas a una crisis de viabilidad extraordinaria (a lo que habría que añadir el contingente importante de agricultores sin tierra cuya situación igualmente es muy precaria). La clave de las políticas agrarias está ahora, parece ser, en el “mercado de tierras”,⁶ en la liberalización comercial y en la implementación de estrategias de desarrollo rural. Aunque en los últimos años se ha producido una revalorización de la acción pública tendente a aminorar los efectos socialmente negativos que este tipo

4. Los países que en estos años llevaron adelante reformas agrarias, aparte de las experiencias previas de México y Cuba y la singular de Nicaragua, fueron, entre otros: Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela, Brasil y Colombia.

5. Desde cuatro enfoques diferentes, puede verse el impacto del neoliberalismo en las políticas agrarias en: David, Dirven, Vogelgesang (2000); Calderon, Chiriboga, Piñero (1992); Murmis (1994); y, Bretón (1999).

6. Esta opción es la apuesta, por ejemplo, de Deininger (2000: 159).

de políticas está comportando y que reconocen los gobernantes y los organismos internacionales que las promueven (De Janvry, Sadoulet y Thorbecke, 1995), sin que ello suponga en ningún caso cambiar el *status quo* existente en el campo de la región.

El ejemplo tal vez más paradigmático en este sentido sea el de México, donde desde principios de los noventa y a partir de diferentes medidas legislativas aprobadas por el gobierno del PRI, se inició un proceso intenso y acelerado de liberalización y privatización de la tierra (Escalante, 2001; De Janvry 1997), que hasta ese momento estaba bajo el control de los ejidos —que como sabemos eran el fruto más significativo de la reforma agraria de principios del siglo xx. Otros países donde se han implementado políticas de este tipo son: Bolivia, Perú, El Salvador, Honduras, Colombia, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, Ecuador o Brasil.

En todo caso, una lectura atenta de todos los censos y recuentos agrarios disponibles en América Latina, pone de manifiesto que el enorme desequilibrio en la distribución de la tierra, de igual modo que ocurre con el resto de recursos, sigue siendo el rasgo más significativo de las estructuras agrarias de esta región.⁷ En la actualidad existirían casi 21 millones de explotaciones agrarias en América Latina y el Caribe que contarían con un volumen de tierras de aproximadamente 950 millones de hectáreas. Para facilitar el análisis de esas estructuras, hemos utilizado los datos procedentes de los últimos censos disponibles de los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela, Perú, Guatemala, El Salvador y México, que agrupan el 97% de la superficie agraria de la región.

El resultado más evidente de este análisis es que el desequilibrio estructural es incuestionable, dado que sobre 20,5 millones de explotaciones contabilizadas, 11,4 millones tenían menos de 5 hectáreas de superficie agraria —suponiendo, por tanto, el 55,3% del total—, mientras que las unidades de más de 100 hectáreas eran 1,66 millones —un 5,7% del total. En cambio, si tenemos en cuenta la tierra que tienen esas unidades de producción se patentiza perfectamente el desequilibrio, pues las explotaciones de menos de cinco hectáreas solamente contarían con 26,9 millones de hectáreas, un 2,9% de los 930 millones que suma la superficie agraria total de esos países; en contraposición, en las grandes de más de cien hectáreas se concentraban 681,3 millones de hectáreas, es decir, el 73,3% del total de tierras.

Aún asumiendo que la realidad de las estructuras entre los diversos países muestra diferencias sensibles —incluso en un mismo país pueden existir disparidades territoriales enormes—, y que el grado de intensificación productiva puede alterar sensiblemente los resultados de una pequeña explotación, creemos que es difícil negar que esas cifras estimativas dibujan un campo latinoamericano profundamente desequilibrado en términos de la distribución de los recursos productivos y, por tanto, de una notable injusticia social. Y si comparamos estos resultados con los registrados en los censos agrarios de los años sesenta y setenta, podremos comprobar que, después de dos décadas de ajuste

7. En este sentido, como muy acertadamente ha puesto de manifiesto Kay (1998): “las reformas agrarias de los sesenta y ochenta no pudieron incorporar al campesinado en el proceso de desarrollo. Las contrarreformas y las políticas neoliberales adoptadas por muchos países latinoamericanos desde los años ochenta han profundizado el carácter exclusionista de la modernización agrícola en la región” (p. 63).

estructural neoliberal en el campo, esa desigualdad social que comportan las estructuras productivas latinoamericanas no ha cambiado de signo significativamente.

Se amplía la brecha de la productividad del sector agrario de América Latina y el de los países más “desarrollados”

La dinámica productiva

La actividad agropecuaria en América Latina ha mostrado un neto crecimiento en términos de la obtención física de productos. La ampliación de las tierras cultivadas, el aumento de los rendimientos físicos merced al cada vez mayor uso de insumos industriales y de avances genético-tecnológicos en las variedades de plantas, semillas y animales utilizados, como también fruto de la expansión del parque de maquinaria, son algunos de los factores que han inducido a ese crecimiento de la producción agropecuaria. No obstante, no todos los cultivos ni todos los tipos ganados han seguido dicha tendencia positiva. Es evidente, asimismo, que la evolución de los precios, tanto los internos como los internacionales, así como los efectos coyunturales del impacto de problemas climatológicos o de diversos desastres naturales, hechos a los que habría que añadir los cambios en las políticas agrarias de cada país o los efectos de la implementación de los diversos acuerdos comerciales, han tenido implicaciones sustantivas y diferenciadas en algunos cultivos y aprovechamientos pecuarios y en determinados territorios. Impactos que en numerosos casos han sido más bien contraproducentes. Todo lo cual ha conducido a que ese fuerte incremento de la producción física de la agricultura se haya traducido en modestos avances en la rentabilidad, en la productividad y, por encima de todo, en los niveles de vida de los agricultores.

En el año 1980 la aportación del sector agrario y de la pesca al PIB de América Latina y el Caribe fue de 74.266 millones de dólares —en valores corrientes de cada año—, ascendiendo a 114.645 millones en el año 1990 y, finalmente, alcanzando los 135.021 millones en el año 2000. Esto supone un crecimiento medio anual en términos nominales del 5,4% en la década de los ochenta y de un 1,8% en la década de los noventa. Sin embargo, si tenemos en cuenta el incremento de los precios implícitos en el PIB y, por lo tanto, hablamos en valores constantes —en este caso en dólares constantes de 1995—, el resultado cambia sustancialmente. En efecto, entre 1980 y 1990 el PIB agrario y pesquero latinoamericano aumentó en términos reales de media anual en un 2,3%, siendo ese índice del 2,7% para el período que abarcan los años 1990 y el 2000 (cuadro 1).

¿Por qué esta disparidad? Básicamente esta situación es consecuencia de que los precios implícitos en el PIB agropesquero se incrementaron notablemente en los años ochenta, un 3,2% de media anual, mientras cayeron en los noventa un -0,9% de media anual. Y, ello tiene una extraordinaria importancia, porque demuestra fehacientemente que la generalización de las políticas neoliberales en materia agraria, la expansión de los acuerdos de liberalización comercial y la propia globalización de las prácticas económicas, ha comportado en la última década una disminución real de los precios que reciben los agricultores en América Latina por la venta de sus productos. Aún asumiendo la prevención necesaria en el uso de este tipo de estadísticas —especialmente por el sesgo que supo-

| Países y territorios | PIB agrario y pesquero en millones de \$ corrientes | | | Tasa anual media del PIB agropesquero (valores constantes) | |
|-----------------------------|---|-----------|-----------|--|-----------|
| | 1980 | 1990 | 2000 | 1980-1990 | 1991-2000 |
| Argentina | 13.377,1 | 11.448,3 | 13.682,1 | 1,40 | 2,69 |
| Belice | 49,2 | 90,0 | 148,6 | 0,72 | 6,30 |
| Bolivia | 680,9 | 800,7 | 1.856,6 | 2,10 | 3,05 |
| Brasil | 16.380,7 | 52.607,4 | 43.521,3 | 2,74 | 3,04 |
| Chile | 2.071,5 | 2.638,1 | 7.982,2 | 6,13 | 4,60 |
| Colombia | 5.581,1 | 6.725,8 | 11.385,7 | 3,02 | 1,49 |
| Costa Rica | 975,9 | 1.022,2 | 1.530,2 | 3,25 | 6,08 |
| Cuba | 1.129,0 | 2.388,0 | 1.702,3 | 2,66 | -2,34 |
| Ecuador | 1.419,6 | 1.431,8 | 1.281,7 | 4,48 | 1,43 |
| El Salvador | 1.481,4 | 821,2 | 1.319,3 | -1,30 | 1,43 |
| Granada | 17,0 | 29,9 | 30,1 | -0,60 | -1,20 |
| Guatemala | 1.954,1 | 1.970,8 | 4.236,0 | 1,32 | 2,84 |
| Guayana | 191,3 | 133,2 | 250,4 | -0,70 | 6,20 |
| Haití | 474,9 | 719,8 | 1.414,0 | -0,11 | -1,60 |
| Honduras | 608,1 | 653,1 | 872,6 | 2,80 | 2,26 |
| Jamaica | 233,4 | 299,7 | 557,9 | 0,60 | 1,90 |
| México | 16.461,0 | 20.383,4 | 25.277,3 | 1,40 | 2,24 |
| Nicaragua | 327,4 | 486,4 | 788,4 | -4,81 | 5,16 |
| Panamá | 331,5 | 504,8 | 664,0 | 3,04 | 1,88 |
| Paraguay | 1.071,1 | 1.469,3 | 1.507,8 | 4,14 | 1,81 |
| Perú | 2.127,3 | 2.331,6 | 4.493,5 | 2,47 | 5,43 |
| Rep. Dominicana | 1.386,7 | 835,3 | 2.198,0 | 4,36 | 3,96 |
| Surinam | 80,8 | 35,2 | 128,8 | 0,10 | 0,50 |
| Trinidad y Tobago | 142,9 | 126,7 | 119,4 | -5,90 | 1,90 |
| Uruguay | 1.296,9 | 808,9 | 1.150,4 | -0,10 | 2,48 |
| Venezuela | 3.352,4 | 2.613,2 | 5.699,1 | 2,19 | 1,09 |
| Caribe y otros territorios* | *1.062,9 | *1.269,9 | *1.222,7 | ***1,79 | **0,53 |
| América Latina y el Caribe | 74.266,1 | 114.644,6 | 135.020,7 | 2,25 | 2,65 |

*Incluye los datos referidos a Aruba, Anguilla, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Bermudas, Islas Caimán, Dominica, Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, Antillas Holandesas, Montserrat, St. Kittis y Nevis, Santa Lucía, St. Vicente y las Granadinas, Puerto Rico, Islas Vírgenes Británicas e Islas Vírgenes dependientes de los Estados Unidos. **Incluye los datos de Barbados, Antigua y Barbuda, Puerto Rico, Dominica, St. Kittis y Nevis, Santa Lucía y St. Vicente y las Granadinas.

Fuente: elaboración propia a partir de las cifras que se recogen en la base de datos del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario Internacional, además de la información que aparece en: CEPAL (2002), *Anuario Estadístico de América Latina y El Caribe 2001*, Santiago de Chile.

ne la conversión a dólares de cada moneda nacional—, no debemos soslayar que esa caída de los precios que ingresan los agricultores por las ventas que realizan se ha producido en la misma década, la de 1990 al 2000, en la que la inflación media anual de Latinoamérica ha sido del 191%. Y, por lo tanto, parece incuestionable que hemos asistido a una merma muy considerable de la capacidad de compra de los ingresos de muchos agricultores —agravada, es evidente, tanto por la existencia de unas estructuras productivas profundamente desiguales, como por la disminución drástica de las ayudas públicas que recibe el campo en la región.

A escala territorial la dinámica seguida por los distintos países ha sido muy heterogénea, producto de las dispares coyunturas internas político-económicas y de su grado de inserción en la economía internacional. Entre 1980 y el 2000 el crecimiento del PIB agrario y pesquero alcanzó valores muy elevados en Chile, con una alza media anual del

CUADRO 1
PIB de la agricultura y la pesca por países en millones de dólares corrientes de cada año (1980, 1990 y 2000).

5,4% (en términos reales), así como en Costa Rica con un 4,7%, la República Dominicana con un 4,2% y en Perú con un 4%. En cambio, Trinidad y Tobago habría registrado un valor negativo del -2% durante estos veinte años, como también Haití con un -0,9%. Pobres resultados que de igual modo se contabilizaron en los sectores agrarios de El Salvador con apenas un aumento positivo del 0,1%, o en Cuba y en Nicaragua con un 0,2%. Los tres grandes países latinoamericanos, por su parte, han dibujado una trayectoria expansiva pero moderada, dado que México creció a un ritmo anual del 1,8%, Argentina al 2% y Brasil al 2,9%.

La trayectoria seguida por la productividad

Como disponemos del valor de la producción medido en términos del PIB y de la ocupación del sector agrario —en ambos casos sin incluir la pesca—, podemos deducir la productividad que existe en cada una de las agriculturas latinoamericanas. En el año 1999 cada trabajador en el campo de América Latina y el Caribe obtuvo una producción media de 2.473 dólares, un índice muy bajo si lo comparamos con el resultado de la agricultura estadounidense que fue de 41.627 \$ —17 veces más— y al conseguido por el agro europeo que alcanzó los 20.556 \$ por ocupado —8 veces más. En América Latina, por lo tanto, se necesitaron 46,8 millones de trabajadores para obtener una producción agraria similar a la de los EEUU, pero en este país solamente se utilizó la fuerza de trabajo de 3,2 millones de personas.

Pero la realidad latinoamericana muestra, a su vez, una enorme disparidad interna en cuanto al grado de productividad alcanzado por las diversas agriculturas. Simplemente un dato ilustrativo, el sector agrario de Puerto Rico logró una producción por ocupado de 17.127 \$, mientras que en el otro extremo de la balanza encontrábamos a Haití con sólo 549 \$; es decir, el agro puertorriqueño consiguió una productividad 31 veces superior a los valores registrados por el mundo agropecuario y forestal haitiano. Dejando de lado a Puerto Rico y otros territorios del Caribe, los cuatro países cuyas agriculturas muestran un mayor grado de desarrollo de las fuerzas productivas —si los medimos en términos de productividad— serían Uruguay (9.671 \$), Argentina (7.983 \$), Chile (5.662 \$) y Costa Rica (5.372 \$). Contrariamente, los ratios menores eran los registrados en Bolivia (811 \$), Ecuador (978 \$), Honduras (1.051 \$), Nicaragua (1.045 \$), Perú (1.422 \$) y Cuba (1.739 \$) (cuadro 2).

Desde algunos sectores institucionales y desde ciertos ámbitos académicos pese a constatar el *dramatismo* de estos resultados, se ha lanzado la tesis de que debemos dar mayor importancia al hecho, que en principio parece que reflejan las cifras oficiales, de que la implementación del ajuste estructural permanente y la puesta en marcha de las políticas agrarias y comerciales neoliberales en las dos últimas décadas, ha permitido un crecimiento destacable de la productividad, y que ello reflejaría una mejora sustancial de las formas de organización que caracterizan a dicho ámbito económico y de los recursos tecnológicos utilizados como medios de producción, resultando de dicho proceso un incremento sostenido de la rentabilidad de la actividad agraria en América Latina. Como veremos a continuación todo ello es cierto, *pero también lo es que la brecha de productividad con el “primer mundo” asimismo cada vez es mayor.*

CUADRO 2

Ocupación, producción y productividad del sector agropecuario y forestal en los países de América Latina y el Caribe en el año 1999* (no incluye la pesca).

| Países y territorios | Ocupados en la agricultura (n° personas) | Ocupados en la agricultura (% de total de ocupados) | PIB agropecuario y forestal (millones de \$ corrientes) | PIB agropecuario y forestal (% del total del PIB) | Productividad agraria (PIB agrario / ocupados agrarios, en \$) |
|----------------------------|--|---|---|---|--|
| Argentina | 1.468.100 | 11,44 | 11.720,1 | 4,14 | 7.983,2 |
| Belice | 19.905 | 23,35 | 96,0 | 13,94 | 4.820,4 |
| Bolivia | 1.586.200 | 43,40 | 1.285,7 | 15,38 | 810,6 |
| Brasil | 17.072.000 | 23,82 | 38.101,7 | 7,20 | 2.231,8 |
| Chile | 705.070 | 13,05 | 3.991,8 | 5,90 | 5.661,6 |
| Colombia | 3.282.000 | 22,16 | 10.118,7 | 11,69 | 3.083,1 |
| Costa Rica | 266.118 | 20,18 | 1.429,5 | 9,40 | 5.371,6 |
| Cuba | 908.600 | 24,76 | 1.579,9 | 6,03 | 1.738,9 |
| Rep. Dominicana | 515.000 | 19,42 | 1.962,9 | 11,28 | 3.811,4 |
| Ecuador | 1.433.000 | 27,89 | 1.402,0 | 10,24 | 978,4 |
| El Salvador | 525.000 | 23,08 | 1.237,5 | 10,00 | 2.357,2 |
| Guatemala | 2.070.000 | 49,29 | 4.176,8 | 22,82 | 2.017,8 |
| Guayana | 73.400 | 20,38 | 201,0 | 28,97 | 2.738,4 |
| Haití | 2.162.500 | 62,68 | 1.188,5 | 29,72 | 549,6 |
| Honduras | 788.103 | 32,61 | 828,0 | 15,37 | 1.050,6 |
| Jamaica | 177.500 | 18,58 | 531,2 | 7,05 | 2.992,5 |
| México | 7.840.600 | 19,99 | 21.220,6 | 4,43 | 2.706,5 |
| Nicaragua | 644.200 | 41,72 | 672,9 | 29,67 | 1.044,5 |
| Panamá | 164.128 | 16,90 | 504,9 | 5,28 | 3.076,5 |
| Paraguay | 765.452 | 31,71 | 1.938,1 | 25,04 | 2.532,0 |
| Perú | 3.176.000 | 29,49 | 4.517,3 | 8,69 | 1.422,3 |
| Puerto Rico | 23.300 | 2,03 | 399,1 | 0,74 | 17.127,2 |
| Surinam | 25.450 | 17,87 | 83,8 | 8,38 | 3.292,7 |
| Trinidad y Tobago | 32.900 | 6,72 | 133,5 | 2,05 | 4.059,2 |
| Uruguay | 108.998 | 10,22 | 1.054,1 | 5,00 | 9.670,6 |
| Venezuela | 892.243 | 10,23 | 4.277,1 | 4,14 | 4.793,6 |
| Caribe y otros territorios | 93.007 | 8,80 | 1.145,1 | 3,75 | 12.311,6 |
| América Latina y el Caribe | 46.818.774 | 23,13 | 115.797,7 | 6,20 | 2.473,3 |
| Estados Unidos | 3.176.000 | 2,38 | 132.208,1 | 1,42 | 41.627,2 |
| Unión Europea | 6.570.904 | 4,22 | 135.073,3 | 1,63 | 20.556,3 |

*Estos datos solamente incluyen la información referida a las producciones agrícolas, ganaderas y forestales y, por tanto, no tienen en cuenta las cifras referidas a la pesca. Debe señalarse que estos datos difieren de los de la FAO, porque aquí las fuentes básicas que hemos utilizado son la contabilidad nacional, las estadísticas nacionales de mercado laboral y las cifras de PIB y de conversión de la moneda nacional en dólares del FMI.

Fuente: elaboración propia a partir de las cifras que se recogen en los institutos nacionales de estadística de cada país (contabilidad nacional, estructura del PIB, composición del empleo y peso de la agricultura y de la pesca), y en la base de datos del Banco Mundial, del Organismo Internacional del Trabajo (OIT), de la FAO, del BID y del Fondo Monetario Internacional.

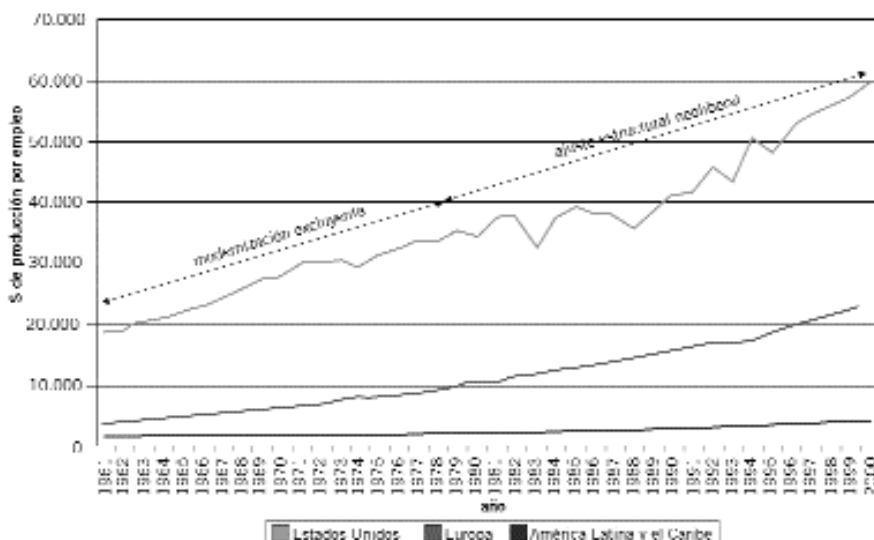
Para comprobarlo debemos usar los valores de producción y de número de activos agrarios que utiliza la FAO, y que están disponibles en su base de datos —FAOSTAT— (y, por ello, esta información no es comparable con la que hemos citado en los párrafos anteriores). A partir del análisis de la evolución productividad en América Latina en un período más amplio de tiempo, desde los años sesenta hasta la actualidad, podemos deducir dos tesis. En primer lugar, efectivamente la producción por activo agrario ha aumentado relativamente más y con mayor intensidad en los veinte postreros años que en la etapa desarrollista anterior. Así, la productividad era en el año 1961 de 1.444 \$ en América Latina y el Caribe (dólares internacionales medios de 1989/1990/1991 según

la FAO) y de 2.130 \$ en el año 1980, de lo que deducimos un crecimiento medio anual del 2,5%; en cambio, en 1990 se alcanzaron los 2.676 \$ y, por tanto, el ritmo de aumento en los ochenta fue del 2,6%, llegándose a los 3.638 \$ en el año 2000, y mostrando con ello una progresión en los noventa del 3,6% anual.⁸

Y, en segundo lugar, y pese a que las cifras anteriores parecen corroborar la bonanza del sector agrario latinoamericano bajo la égida del neoliberalismo, cabe matizar que la productividad también se ha incrementado considerablemente en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Si en 1961 la productividad estadounidense era de 18.792 \$ y la europea de 3.756 \$, en el año 2000 esos valores fueron de 59.281 \$ y de 23.123 \$ respectivamente. De tal forma que, por ejemplo, la producción por activo en el sector agrario de los EEUU creció en un 4,5% anual y la de la Unión Europea en un especta-

FIGURA 1

Comparación de la evolución de la productividad, 1961-2000 –\$ de producción por empleo– (\$ internacionales sobre la base del periodo 1989-90-91 y la población activa agraria según la FAO).



Fuente: elaboración propia a partir de los índices de producción agrícola, ganadera y agropecuaria de un total de 43 países y territorios de América Latina y el Caribe, que se recogen en la base de datos de la FAO (FAOSTAT, 2002). Los datos de población activa agraria también proceden de FAOSTAT (2002).

8. Las estrategias para aumentar la productividad han sido básicamente tres: el uso de insumos industriales, el recurso a la utilización de maquinaria y la expansión de la irrigación, adoptadas con el objetivo de conseguir acrecentar tanto el rendimiento físico de la actividad por unidad de superficie como para incrementar la productividad del trabajo utilizado en el proceso productivo agropecuario. Todos ellas han contado con el apoyo e impulso explícito de la administración, pues en el fondo, así, se alcanzarían los verdaderos objetivos políticos de tal apuesta: por un lado, asegurar, al aumentar la producción, el autoabastecimiento alimentario y, por otro, generar un proceso de acumulación de capital en el campo que a través de las entidades financieras fluya hacia la industrialización, verdadero objetivo esencial de las políticas económicas de gran parte de los países de la región.

cular 5% entre 1990 y el 2000, superando ampliamente el 3,6% logrado en América Latina. Esto tiene una traslación inmediata: si en 1961 la productividad agraria de los Estados Unidos era 13 veces superior a la latinoamericana y la de la UE era casi 3 veces mayor, en el año 2000 ese índice en el agro norteamericano era 16 veces más alto y en la UE lo multiplicaba por seis. La consecuencia de este hecho es evidente si tenemos presente la desigual estructura productiva y la inexistencia —o casi— de políticas públicas que aminoren las implicaciones sociales de dichos procesos: la pobreza en el campo latinoamericano alcanza a la mayoría de los agricultores y a sus familias. Y esto sucede en un contexto de liberalización comercial acelerada donde el criterio productividad es esencial para competir. Y, apuntamos nosotros, hace más necesario que nunca un cambio drástico en las políticas agrarias implementadas —cuyo resultado podemos fácilmente observar—, y más urgente aún una reforma de las estructuras productivas y de la distribución de los recursos y de la capacidad de acceso a los mismos, con el objetivo esencial de mejorar sensiblemente los niveles de vida de la mayoría de la población que se dedica a la agricultura.

Estados Unidos era 13 veces superior a la latinoamericana y la de la UE era casi 3 veces mayor, en el año 2000 ese índice en el agro norteamericano era 16 veces más alto y en la UE lo multiplicaba por seis. La consecuencia de este hecho es evidente si tenemos presente la desigual estructura productiva y la inexistencia —o casi— de políticas públicas que aminoren las implicaciones sociales de dichos procesos: la pobreza en el campo latinoamericano alcanza a la mayoría de los agricultores y a sus familias. Y esto sucede en un contexto de liberalización comercial acelerada donde el criterio productividad es esencial para competir. Y, apuntamos nosotros, hace más necesario que nunca un cambio drástico en las políticas agrarias implementadas —cuyo resultado podemos fácilmente observar—, y más urgente aún una reforma de las estructuras productivas y de la distribución de los recursos y de la capacidad de acceso a los mismos, con el objetivo esencial de mejorar sensiblemente los niveles de vida de la mayoría de la población que se dedica a la agricultura.

El comercio exterior agrario y forestal de América Latina y el Caribe: cada vez se vende más, pero también se compra cada vez más

El período que analizamos, entre 1980 y el 2000, ha supuesto un crecimiento substancial del comercio exterior de productos agroalimentarios de América Latina. En 1980 el valor de las exportaciones de productos agrarios, forestales y agroindustriales —sin incluir la pesca— ascendió a 33.622 millones de \$, mientras que en el año 1997 se alcanzaron los 60.955 millones de \$, si bien los años siguientes registraron un descenso hasta situarse este valor en los 55.240 millones del año 2000. Estas cifras supondrían que se habría logrado una progresión de las ventas al exterior de este tipo de productos del 2,9% de media anual entre 1980 y el 2000; aunque hemos de diferenciar que en los años ochenta ese índice fue del 1,5% (los años de la crisis económica), mientras que en los años noventa el auge fue más acelerado al conseguirse una ratio del 4,3%. Toda vez que estas cifras se basan en el cambio anual de cada moneda nacional por el dólar estadounidense y, por tanto, no reflejan la evolución real de los ingresos por

exportación —al no descontar la trayectoria seguida por los precios implícitos ni la inflación—, hemos optado por convertir estos valores en dólares constantes de 1995, y ello nos permite señalar dos hechos sustantivos. En primer lugar, corroboramos que la expansión de las exportaciones agroalimentarias ha sido considerable, del orden del 4,1% de media anual entre 1980 y el 2000; y, en segundo lugar, que los precios implícitos en estas exportaciones han caído de media anual un -1,2%. De ahí que el esfuerzo de las economías latinoamericanas se haya centrado en exportar una mayor cantidad de productos agroalimentarios, para equilibrar de esta forma la disminución de los precios unitarios de las exportaciones (precios internacionales que, en buena medida, están condicionados a los intereses de las grandes empresas multinacionales que controlan la transformación y/o distribución comercial de esos bienes agrarios o forestales, y que ante la contracción del margen de beneficios en los países centrales del sistema buscan una reducción de los costes de las materias primas en los países de origen de éstas).

Pero si estos años han visto una progresión de las ventas al exterior de la agricultura y la agroindustria latinoamericana, no es menos cierto que las importaciones también se han expandido, con mayor intensidad si cabe. Efectivamente, las adquisiciones de productos agroalimentarios y forestales de América Latina ascendieron a 16.705 millones de \$ en 1980, creciendo hasta alcanzar el valor máximo de este período estudiado en el año 1997 con 38.825 millones de \$, y descendiendo a continuación hasta situarse en los 36.354 millones del año 2000. Esto supone un aumento medio anual a precios corrientes del 4,4% para el conjunto de las dos décadas (siendo del 1,3% en los ochenta y del 7,6% en los noventa). Tanto con este criterio, como si nos referimos a dólares constantes de 1995, el auge de las importaciones de alimentos, materias primas agrarias y productos forestales ha superado claramente el ritmo de incremento de las exportaciones —a precios constantes, las adquisiciones del exterior crecieron entre 1980 y el 2000 un 5,8%.

La principal implicación de estas dispares trayectorias es que el saldo exterior de este tipo de productos aunque en términos absolutos ha seguido siendo positivo, en términos proporcionales cada vez es menor. Fijémonos en un dato: en el año 1961 las importaciones de estos bienes representaban el 28,7% del valor de las exportaciones, en 1980 ese índice era ya del 49,7%, mientras que en el año 2000 lograba ya el 66,3%. Es cierto, pues, que el saldo comercial de los bienes agroalimentarios y forestales es positivo y muy considerable en América Latina, con un monto total en el 2000 de 18.887 millones de \$ —sin incluir la pesca—, pero no lo es menos que progresivamente se está desarrollando una significativa penetración de productos que provienen de fuera de Latinoamérica (de los Estados Unidos, Canadá, Unión Europea, Asia...). Es, como vemos, *el coste de la globalización*.⁹

9. Asimismo, el papel central que históricamente ha desempeñado la agricultura como principal origen de las exportaciones latinoamericanas, junto con el petróleo y sus derivados, está declinando en los últimos tiempos, a medida que las ventas al exterior de bienes industriales van incrementándose con fuerza. Entre 1979 y el 2000 las exportaciones de productos agrarios, agroindustriales y forestales aumentaron en un 83,3%, pero el resto de exportaciones de la economía de la región crecieron a un vertiginoso ritmo del 400,8%. La consecuencia de ello es que en 1979 los productos agroindustriales suponían el 34% del total de las exportaciones de América Latina y el Caribe, mientras que en el año 2000 ese índice era de sólo del 16%.

Desde el punto de vista de la trayectoria seguida en el transcurso de estas dos décadas, podemos reseñar que los países que han contemplado un incremento más importante de las exportaciones agroalimentarias en estos años han sido: Chile con un crecimiento impresionante del 635%, así como Bolivia, Venezuela, México, Uruguay, Trinidad y Tobago y Belice, todos ellos con valores que oscilan entre el 174% y el 311%, en todo caso muy por encima del valor referido al conjunto de América Latina que fue del 83%. No obstante, hemos de destacar que también hay un grupo de países con un valor que en el año 2000 era inferior al registrado en 1979, como es el caso de Cuba con una caída del 85%, y de la República Dominicana, El Salvador, Haití, Nicaragua y Surinam (cuadro 3).

CUADRO 3

Exportaciones agropecuarias y agroindustriales de América Latina y el Caribe en el año 2000.

| Productos | Exportaciones en el 2000 miles de \$ | Importaciones en el 2000 miles de \$ | Saldo en el 2000 miles de \$ | Diferencia exportaciones 1979-2000 % | Diferencia importaciones 1979-2000 % |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Aceites animales y vegetales | 2.507.704 | 1.677.939 | 829.765 | 112,3 | 100,1 |
| Legumbres | 272.910 | 359.609 | -86.699 | 27,2 | 135,5 |
| Arroz | 451.311 | 670.796 | -219.485 | 123,2 | 34,2 |
| Azúcar | 2.737.628 | 332.693 | 2.404.935 | -48,8 | 89,7 |
| Bananas | 2.436.466 | 172.229 | 2.264.237 | 160,0 | 101,8 |
| Bebidas (excluido el vino) | 1.943.944 | 583.791 | 1.360.153 | 888,7 | 63,0 |
| Café | 5.406.587 | 109.028 | 5.297.559 | -22,9 | -71,7 |
| Cacao, té y especias | 1.287.451 | 768.750 | 518.701 | -37,8 | 247,7 |
| Tabaco y preparados | 1.642.235 | 622.430 | 1.019.805 | 180,6 | 406,5 |
| Carne y preparados | 3.627.266 | 2.726.159 | 901.107 | 110,6 | 302,7 |
| Cereales y preparados | 3.635.759 | 6.471.305 | -2.835.546 | 88,9 | 106,2 |
| Fibras textiles y algodón | 588.070 | 2.382.258 | -1.794.188 | -59,7 | 1.012,0 |
| Frutas y hortalizas (sin bananas) | 8.762.272 | 3.022.201 | 5.740.071 | 378,6 | 218,9 |
| Jugos de frutas | 1.646.118 | 183.624 | 1.462.494 | 326,6 | 718,3 |
| Leche y productos lácteos | 664.370 | 1.986.807 | -1.322.437 | 792,8 | 217,1 |
| Semillas oleaginosas | 3.792.642 | 1.685.911 | 2.106.731 | 226,7 | 349,2 |
| Tortas y harinas oleaginosas | 4.194.489 | 801.453 | 3.393.036 | 175,6 | 286,7 |
| Vino | 760.644 | 276.494 | 484.150 | 2.059,9 | 132,9 |
| Animales vivos | 516.246 | 365.464 | 150.782 | 30,3 | -4,2 |
| Huevos | 38.849 | 97.508 | -58.659 | 654,3 | 185,6 |
| Despojos animales, piel y cuero | 122.165 | 258.730 | -136.565 | -14,7 | 56,1 |
| Miel y cera | 157.276 | 4.181 | 153.095 | 101,8 | 123,7 |
| Chocolates, dulces y preparados | 767.055 | 660.652 | 106.403 | 1.063,6 | 824,6 |
| Otros agropecuarios y agroindustriales | **1.019.020 | **2.988.536 | **1.969.516 | 268,8 | 369,6 |
| Forestales (madera, papel, cartón...) | 6.262.291 | 7.145.769 | -883.478 | 434,7 | 292,6 |
| Agrarias, forestales y agroindustriales (a) | 55.240.768 | 36.354.317 | 18.886.451 | 84,1 | 196,1 |
| Pesca y derivados (b) | *6.500.000 | *1.100.000 | 5.400.000 | 269,4 | 164,7 |
| Exportaciones primarias (c=a+b) | 61.743.533 | 37.454.317 | 24.289.216 | 94,4 | 195,1 |
| Exportaciones todos los sectores (d) | 346.300.953 | 363.054.383 | -16.753.430 | 292,8 | 295,2 |
| Agroforestales/total exportaciones (a/d) | 15,95 | 9,78 | - | - | - |
| Primarias/total exportaciones (c/d) | 17,83 | 10,08 | - | - | - |

Fuente: elaboración a partir de la información que aparece en la base de datos de la FAO (FAOSTAT, 2002), y que recoge los datos de 43 países y territorios de América Latina y el Caribe. *Estimación. **Incluye además los datos de la Guayana Francesa, Martinica y Guadalupe (248,7 millones de \$) de los que no disponemos de distribución por productos de las exportaciones del año 2000.

En cambio, la expansión de las importaciones de estos bienes ha sido generalizada en toda la región. Es más, en algunos países se han alcanzado valores muy considerables, puesto que en Paraguay las importaciones han crecido en un 776%, en México un 664%, en Nicaragua un 436% y en Guatemala un 405% —la media regional ha sido del 196%. Sólo en Cuba y en Guayana se habría contabilizado una disminución del valor de las importaciones agroindustriales y forestales. El resultado de la progresión dibujada por las importaciones refleja que ahora son numerosos los países latinoamericanos que tienen un saldo comercial negativo, en lo que se refiere a este tipo de productos. Un caso singular es el de México, ya que si en 1979 obtuvo un superávit comercial de 446 millones de \$, en el año 2000 las compras superaron a las ventas en 4.403 millones de \$. Esta situación se reproduce también en otros países, *algunos de los cuáles paradójicamente han construido el armazón de su desarrollo económico en la agroexportación*. Por ejemplo, El Salvador que en 1979 consiguió un saldo positivo de 579 millones de \$, en el año 2000 éste se había tornado negativo en -212 millones de \$; o la República Dominicana que en 1979 logró un superávit cifrado en 344 millones de \$ y en cambio en el 2000 fue negativo en -408 millones de \$; fenómeno que asimismo acontece en Panamá, Nicaragua, Surinam o Perú. De igual modo, en Cuba se ha pasado de obtener una ganancia de 3.384 millones de \$, a hablar en la actualidad de déficit comercial agroindustrial de -90 millones de \$. Contrariamente a esta evolución, podemos resaltar lo acontecido en Bolivia, que de registrar un déficit de -13 millones de \$ en el año 1979, ahora va a alcanzar un superávit de 153 millones en el año 2000; y, de manera especial, hemos de referirnos a Chile que de un resultado positivo de 14 millones de \$ en la primera fecha, va a pasar a los 3.291 millones de \$ en la segunda.

Hasta ahora hemos hablado del valor del comercio de productos agrarios, forestales y agroindustriales —valorados en dólares corrientes. Sin embargo, y dada la importancia que para el mundo agrario de América Latina y el Caribe tiene el desempeño de las exportaciones, vale la pena detenernos en analizar con un poco más de detalle su evolución relacionando el volumen físico exportado y el precio percibido por dichas ventas, relación que determina el ingreso que recibirán los agricultores y/o los empresarios agroindustriales por dichas exportaciones. De este estudio deducimos dos tesis esenciales: primera, el volumen físico exportado ha aumentado con claridad y, segunda, el valor percibido por cada unidad vendida se ha reducido durante estos años. Aunque, es evidente, que este comportamiento no ha sido generalizado a todos los productos ni en todos los territorios (cuadro 4).

En efecto, si tenemos en cuenta la suma de los principales productos de exportación de América Latina (aproximadamente el 92% del valor y casi el 95% del volumen), podemos comprobar que la cantidad física de productos agroforestales y agroindustriales exportada se ha incrementado notablemente en este período de implementación de políticas comerciales neoliberales. Así, entre 1979 y el año 2000 ese volumen creció un significativo 132%, es decir, se duplicó. No obstante, y como ya hemos señalado, la tendencia seguida por los precios percibidos ha sido muy diferente, ya que el precio medio por kg de los productos vendidos ha pasado de 0,47 \$ en 1979 a 0,36 \$ en el año 2000, lo que implica una reducción del 24% entre ambas fechas.

Esta caída del precio unitario, en buena medida, se explica por la conjugación de diversos procesos: la disminución de los aranceles y de las subvenciones a la exportación

CUADRO 4

Exportaciones físicas agropecuarias y agroindustriales de América Latina y el Caribe.

| Productos | Cantidad exportada | | Diferencia 1979- 2000 % | Precio | | Diferencia 1979- 2000 % |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| | 1979 (toneladas) | 2000 (toneladas) | | 1979 (\$ por kg) | 2000 (\$ por kg) | |
| Aceites animales y vegetales | 1.700.900 | 6.770.774 | 298,07 | 0,69 | 0,37 | -46,67 |
| Legumbres | 394.537455 | 538.921 | 36,60 | 0,54 | 0,51 | -6,87 |
| Arroz | 62.886 | 1.587.043 | 181,95 | 0,36 | 0,28 | -20,83 |
| Azúcar | 12.774.338 | 14.486.211 | 13,40 | 0,42 | 0,19 | -54,89 |
| Bananas | 5.365.855 | 9.933.788 | 85,13 | 0,17 | 0,25 | 40,45 |
| Bebidas (excluido el vino) | 219.877 | 2.118.190 | 863,35 | 0,89 | 0,92 | 2,63 |
| Café | 2.178.533 | 2.741.111 | 25,82 | 3,22 | 1,97 | -38,70 |
| Cacao, té y especias | 606.259 | 597.397 | -1,46 | 3,41 | 2,16 | -36,88 |
| Tabaco y preparados | 283.277 | 529.177 | 86,81 | 2,07 | 3,10 | 50,22 |
| Carne y preparados | 1.019.075 | 2.176.652 | 113,59 | 1,69 | 1,67 | -1,41 |
| Cereales y preparados | 14.915.799 | 26.655.377 | 78,71 | 0,13 | 0,14 | 5,71 |
| Fibras textiles y algodón | 1.059.330 | 477.248 | -54,95 | 1,38 | 1,23 | -10,48 |
| Frutas y hortalizas (sin bananas) | 3.844.589 | 13.125.651 | 241,41 | 0,48 | 0,67 | 40,20 |
| Jugos de frutas | 400.574 | 1.879.863 | 369,29 | 0,96 | 0,88 | -9,11 |
| Leche y productos lácteos | 190.377 | 2.163.9631 | 1.036,67 | 0,39 | 0,31 | -21,45 |
| Semillas oleaginosas | 4.117.332 | 19.177.963 | 365,79 | 0,28 | 0,20 | -29,87 |
| Tortas y harinas oleaginosas | 7.497.426 | 25.494.194 | 240,04 | 0,20 | 0,16 | -18,95 |
| Vino | 46.578 | 506.218 | 986,82 | 0,76 | 1,50 | 98,73 |
| Madera aserrada | 2.810.500 | 4.998.873 | 778,64 | 0,15 | 0,21 | 40,00 |
| Pulpa de madera | 1.014.3001 | 5.103.188 | 4.031,24 | 0,34 | 0,56 | 64,71 |
| Papel y cartón | 351.300 | 1.737.905 | 3.947,07 | 0,58 | 0,63 | 8,62 |
| Suma parcial productos agropecuarios detallados | 61.353.642 | 142.799.707 | 132,75 | 0,47 | 0,36 | -24,20 |

Fuente: elaboración a partir de la información que aparece en la base de datos de la FAO (FAOSTAT, 2002), y que recoge los datos de 43 países y territorios de América Latina y el Caribe.

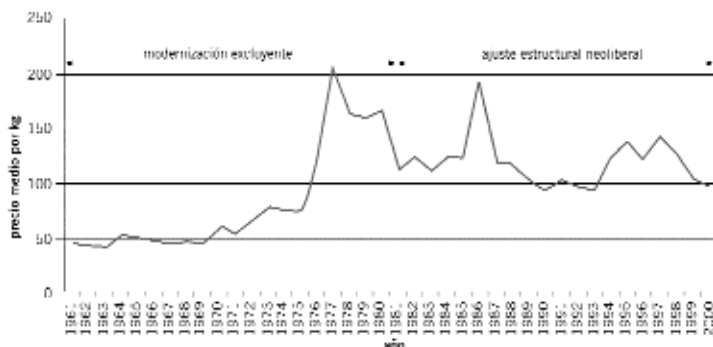


FIGURA 2

Evolución del índice sintético del precio medio por kg de productos agropecuarios, forestales y agroindustriales exportados por América Latina y el Caribe, 1961-2000* (Índice: valor de 1989/1990/1991 es igual a 100).

*Es importante retener que los precios —y, por tanto, el valor de las exportaciones— se refieren a dólares corrientes de cada año, por lo que no están deflactados de la inflación. Es decir, que en realidad la capacidad de compra que refleja la evolución del precio de esas exportaciones es todavía más reducida. Fuente: hemos elaborado un índice sintético del precio medio por kg de diversos productos agropecuarios, forestales y agroindustriales exportados por América Latina y el Caribe a partir de la serie de la FAO sobre exportaciones (en valor y volumen, y de ahí el precio medio) para una serie de productos y para los 43 países y territorios de este subcontinente. Estos productos son los siguientes: semillas oleaginosas, frutas y hortalizas (sin banano), banano, cereales (sin maíz), maíz, carne y preparados, azúcar, tabaco, café, pulpa de madera, papel y cartón, madera aserrada, aceites vegetales y animales, tortas y harinas oleaginosas, legumbres, leche y equivalentes, fibras textiles (incluido algodón) y bebidas.

que tienden a unificar a la baja los precios internacionales, la eliminación de las trabas político-institucionales para el comercio, la presión de las grandes empresas agroindustriales y de distribución comercial para forzar una reducción del precio de sus materias primas en origen, y los esfuerzos de los gobiernos para controlar la inflación en muchos países que comporta diversas medidas que facilitan la contención muy especialmente del precio de los alimentos.

Pero estas cifras comparan solamente dos años y con ello pueden incorporar el sesgo de que uno de ellos tuviera unos precios altos y el otro todo lo contrario. Para solventar este problema metodológico hemos elaborado un *índice sintético del precio medio de los productos exportados* por América Latina y el Caribe, atendiendo al peso que cada producto tiene en el volumen total vendido y en el valor total percibido, utilizando como base el valor medio percibido en los años 1989, 1990 y 1991. El resultado de esta operación es, a nuestro modo de ver, muy revelador. Entre 1980 y el año 2000 los precios unitarios de los productos agroforestales y agroindustriales exportados por América Latina disminuyeron de media anual un $-0,3\%$ en este período (con más ímpetu en la primera década que en la segunda). Trayectoria completamente diferente a la acontecida entre 1962 y 1979, cuando los precios crecieron en un $9,3\%$ cada año.

Ocupación agraria, pobreza y emigración en las áreas rurales

En este último apartado queremos aproximarnos a lo que serían tres aspectos, que enunciamos como *ocupación agraria, pobreza y emigración* en las áreas rurales (es un título y, por supuesto, no establecemos una correlación directa entre los tres), que evidencian las consecuencias más palpables del modelo de desarrollo adoptado en la agricultura latinoamericana en estas dos últimas décadas, y cómo éste ha incidido en el mundo rural en general.

La evolución reciente del empleo en el sector agrario y pesquero latinoamericano muestra una trayectoria de crecimiento moderado, a diferencia de la notable expansión desenvuelta desde la mitad del siglo xx hasta el estallido de la crisis de la deuda externa de los ochenta. En el año 1960 la población activa agraria en América Latina y el Caribe ascendió a 33,3 millones de personas, mientras que en 1980 alcanzó los 44,2 millones, lo que comportó un aumento del 33% . En esta misma etapa, y como punto de comparación, señalaremos que en los Estados Unidos la ocupación agraria disminuyó en un 14% y en la Unión Europea la caída fue del 54% (la sustitución de fuerza de trabajo por capital en estos países fue mucho más importante que en Latinoamérica). En la siguiente etapa, ya bajo la égida del ajuste estructural neoliberal, el empleo agrario ha seguido creciendo en la región, puesto que el número de ocupados en 1999 arribó a los 48 millones, cifra a la que hemos de sumar alrededor de un millón de parados de este sector, lo que arrojaría un volumen de activos agropesqueros de 49 millones de personas, con un incremento del 11% entre 1980 y el 1999 —si bien éste ha sido mucho más vivo en los años ochenta que en los noventa. En contraposición en los Estados Unidos se ha registrado una reducción del 12% y en la Unión Europea del 46% .

Pese a ello, si comparamos esta evolución con la seguida por el conjunto del empleo en todos los sectores, podremos comprobar que el papel desempeñado por la agricultura en la estructura ocupacional latinoamericana se ha constreñido sensiblemente, acor-

de con el progreso desarrollado en el resto de ámbitos económicos, en especial en el sector comercio y servicios. En 1960 casi la mitad de los activos se dedicaban al sector primario, un 48%, en tanto que en el año 1999 esa proporción se ha contraído hasta el 24%. Si bien, sigue siendo un índice mucho más elevado que el que se registra en los países centrales del sistema. Por ejemplo, en los Estados Unidos en el año 1999 solo se empleaba el 2,6% de la fuerza laboral en la agricultura y en la pesca, siendo esa ratio del 4,5% en el caso de la Unión Europea.

En todo caso, la dinámica de los mercados laborales en América Latina refleja una enorme pluralidad de comportamientos. Entre 1980 y 1999 detectamos una reducción importante del empleo agrario en casi todos los países del Caribe. Como, asimismo, ha caído en algunas economías donde ha acontecido una rápida implantación de industrias de diversa índole, que han atraído parte del empleo rural hacia las ciudades —en muchos casos, ligadas a la maquila, incluso a veces ubicadas en pequeñas urbes. Así ha sucedido en El Salvador, Panamá, Jamaica, Colombia, Costa Rica o la República Dominicana. Por otro lado, podemos discernir un segundo grupo de países que lo constituirían aquellos en los que junto a un relativo dinamismo industrial y terciario urbano, se ha desenvuelto un considerable proceso de capitalización de la agricultura que ha expulsado abundante mano de obra. Éste ha sido el caso, por ejemplo, de Uruguay y de Chile (cuadro 5).

Mención especial merecen las trayectorias seguidas por México y Brasil. En ambos casos, el número de agricultores entre 1980 y 1999 prácticamente se mantiene en los mismos niveles. En buena medida, ello es fruto de un doble y hasta cierto punto contradictorio proceso. De una parte, en amplias zonas rurales y urbanas del norte de México, y en las zonas metropolitanas de Sao Paulo, Río de Janeiro y las otras grandes ciudades brasileñas, se ha consolidado con fuerza un amplio tejido industrial, lo que unido a la capitalización desarrollada en algunos sectores agrarios, ha comportado que muchos trabajadores rurales dedicados al sector primario ahora operen en esas nuevas empresas fabriles, emigrando en muchos casos a esas urbes. Y, de otro, el crecimiento demográfico tan intenso sucedido en las áreas rurales del centro y sur del país en el caso mexicano, o en el nordeste, el centro o el sudoeste brasileño, en un contexto en el que la posibilidad de encontrar alternativas laborales en otros sectores económicos en esas zonas es muy reducida, ha conducido a un crecimiento del empleo agrario —una parte del cual se realiza en condiciones muy precarias—, optando muchas familias agrarias por intensificar el uso de la fuerza de trabajo dentro y fuera de la propia unidad de producción.

Sin embargo, en otras áreas de América Latina el volumen de trabajadores agrarios ha aumentado. El caso más significativo sea tal vez el de Nicaragua, donde si en 1980 trabajaban en la agricultura 376.000 personas, en 1999 esa cifra era ya de 655.000, prácticamente el doble. También muy considerable ha sido el crecimiento detectado en otros países, como en Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Surinam, Venezuela, Haití y Honduras. Los factores que explican este proceso son múltiples y no siempre coincidentes, y entre los cuales podemos destacar: la expansión de la frontera agraria, los efectos de las reformas agrarias que en algunos países han erigido un enorme corolario de pequeños minifundios, la crisis económica que se ha cebado especialmente en los grandes núcleos urbanos dificultando la capacidad de creación de nuevos puestos de

trabajo que puedan ocupar los emigrantes rurales (¡incluso la economía informal tiene límites!), y la falta de alternativas socioeconómicas reales a la agricultura en muchos espacios rurales.

La constatación de que la agricultura sigue desempeñando en términos sociolaborales un papel significativo en el escenario económico de muchos países latinoamericanos, ya nos induce a pensar que esa función se acrecienta notablemente si nuestro foco de atención son las áreas rurales. La actividad agraria, de igual modo que la pesca, ha mostrado históricamente una tendencia evidente a la localización en espacios rurales, situación que no ha cambiado sustancialmente con la consolidación de las formas de producción capitalistas en el agro latinoamericano —no obstante, en los últimos años, se está detectando que una parte de los emigrantes a centros urbanos sigue trabajando en la agricultura.

Para refrendar esta tesis hemos utilizado los datos de las encuestas laborales y de los censos disponibles para el ejercicio de 1999 y para los siguientes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela, con lo que las cifras resultantes tienen un elevado grado de representatividad de la realidad de América Latina. A partir de esta operación podemos deducir que el conjunto de áreas rura-

| Países o territorios | 1980 (activos) | 1999 (ocupados) | 1980 % de los acti- vos totales | 1999 % de los ocu- pados totales | 1980-1999 % aumento |
|----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------------------|
| Argentina | 1.384.000 | 1.476.100 | 12,95 | 11,50 | 6,65 |
| Barbados | 11.600 | 5.200 | 9,84 | 4,27 | -55,17 |
| Bolivia | 1.063.000 | 1.593.7001 | 52,83 | 43,61 | 49,92 |
| Brasil | 17.484.000 | 7.372.007 | 36,67 | 24,24 | -0,64 |
| Chile | 800.000 | 80.070 | 20,91 | 14,43 | -2,49 |
| Colombia | 3.561.000 | 3.377.000 | 40,48 | 22,81 | -5,17 |
| Costa Rica | 277.000 | 271.818 | 34,93 | 20,61 | -1,87 |
| Cuba | 879.000 | 917.600 | 23,58 | 25,00 | 4,39 |
| Ecuador | 1.013.000 | 1.593.000 | 39,80 | 31,00 | 57,26 |
| El Salvador | 666.000 | 550.000 | 43,25 | 24,18 | -17,42 |
| Guatemala | 1.276.000 | 2.100.000 | 53,82 | 50,00 | 64,58 |
| Guayana | 67.000 | 78.200 | 26,80 | 21,72 | 16,72 |
| Haití | 1.797.000 | 2.167.000 | 70,94 | 62,81 | 20,59 |
| Honduras | 684.000 | 806.103 | 57,14 | 33,35 | 17,85 |
| Jamaica | 298.000 | 197.500 | 31,17 | 20,68 | -33,72 |
| México | 7.995.000 | 8.048.600 | 36,27 | 20,52 | 0,67 |
| Nicaragua | 376.000 | 655.300 | 39,62 | 42,44 | 74,28 |
| Panamá | 197.000 | 177.628 | 28,93 | 18,29 | -9,83 |
| Paraguay | 514.000 | 769.952 | 44,77 | 31,90 | 49,80 |
| Perú | 2.183.000 | 3.442.200 | 40,29 | 31,96 | 57,68 |
| Rep.Dominicana | 682.000 | 529.000 | 32,48 | 19,95 | -22,43 |
| Surinam | 24.000 | 29.050 | 23,53 | 20,40 | 21,04 |
| Trinidad y Tobago | 46.000 | 39.700 | 10,87 | 8,11 | -13,70 |
| Uruguay | 192.000 | 111.998 | 16,64 | 10,50 | -41,67 |
| Venezuela | 751.000 | 943.043 | 14,57 | 10,81 | 25,57 |
| América Latina | 44.220.600 | 48.031.762 | 34,49 | 23,98 | 8,62 |
| Estados Unidos | 3.883.000 | 3.426.000 | 3,91 | 2,57 | -11,77 |
| Unión Europea | 12.730.000 | 26.898.000 | 9,49 | 4,45 | -45,81 |

CUADRO 5
Evolución
del empleo
en el sector
primario en
América
Latina,
1980-1999
(agricultura,
ganadería,
silvicultura y
pesca).

Fuente: los datos referidos a 1980 se basan en los censos nacionales y en las encuestas laborales relacionadas en casi todos los casos con ellos —al utilizarlos como base. Los datos de 1999 se fundamentan en las encuestas laborales de cada país y en las cifras recogidas en la base de datos de la Organización Internacional del Trabajo (Laborasta, OIT, 2002).

les de América Latina en 1999 contaba con unos 50,7 millones de empleos,¹⁰ un 26,7% del total, si bien en esos territorios se concentraban 31,4 millones de agricultores y agricultoras, es decir, el 71% de todos los estimados para la región (por el contrario, solamente disponían del 17,5% del empleo secundario y del 11,7% del empleo terciario latinoamericano). La especialización agropecuaria, pues, no por conocida deja de ser rotunda.

Pero es más, el peso de la agricultura en la estructura ocupacional de las áreas rurales sigue siendo abrumadoramente mayoritario en la actualidad. Siguiendo con los datos referidos al año 1999, de los 50,7 millones de empleos que se contabilizan en dichas áreas, el 62% lo aportarían los trabajadores agrarios y pesqueros, un 13,6% los ocupados en la industria, la minería y la construcción y el 24,4% en el terciario. Esta composición es muy diferente de la desarrollada en las áreas urbanas, donde el sector primario aportaba el 9,4% del empleo total, la industria un 23,2% y el comercio y los servicios eran los principales ámbitos de ocupación con un 67,4%. Es más, en algunos países el peso de la actividad agraria en el mundo rural alcanza proporciones que denotan la práctica inexistencia de otras actividades económicas (pese a la presencia en algunos casos de la agricultura a tiempo parcial), como así sucede en Bolivia donde la agricultura aportaba el 87,5% del empleo rural o en Perú donde ese índice llegaba al 86,8%. De igual modo, se alcanzan valores significativos, por ejemplo, en Brasil (73%), en Chile (66%), en Nicaragua (66%) o en Ecuador (63%).

Esta función central de la agricultura en la mayoría de las áreas rurales latinoamericanas, unido tanto a unas estructuras productivas del agro profundamente desiguales en términos sociales, como a la precariedad de la presencia de la acción pública correctora de los desequilibrios territoriales y sociales (el estado del bienestar brilla por su ausencia en muchos de estos espacios), *ha conducido a que el rasgo fundamental del mundo rural en América Latina en la actualidad sea la pobreza generalizada*, con todos los grados y matizaciones oportunos dada la poliédrica realidad de la región. Situación que las dos décadas de ajuste estructural no ha conseguido modificar sustancialmente.

No se puede soslayar que los datos que recoge la CEPAL (2002) en su publicación *Panorama Social de América Latina, 2000-2001*, referidos al año 1999, basándose en la información de diecinueve países, revela que el 63,7% de los 121,9 millones de personas que residen en las áreas rurales de estas naciones son oficialmente catalogados como pobres.

Dejando de lado toda la extensa e interesante discusión científica en torno a la conceptualización y a la metodología empleada para el cálculo de la pobreza,¹¹ no hay duda

10. Cabe resaltar que somos plenamente conscientes de las limitaciones de las estadísticas laborales —pero también de las que hacen referencia a la actividad agraria en todas sus facetas— disponibles en América Latina. Por ello, nuestra intención es, al utilizarlas críticamente, mostrar tendencias generales que puedan ser apoyadas por otras valoraciones más cualitativas.

11. En todo caso, no queremos dejar pasar la ocasión para señalar la urgencia de analizar la realidad de la “pobreza” rural latinoamericana superando el estricto y unívoco marco de la pobreza de ingreso/consumo, para utilizar dialécticamente conceptos como “vulnerabilidad”, “privación”, “exclusión” o “capacidades”, en los términos definidos, entre otros, por A. Sen (2000) —uno de los principales investigadores que han apostado por la necesidad de *depensar* y de *reconstruir* el concepto de pobreza. Tal vez este enfoque nos permita responder a una pregunta que nos asalta cuando leemos las cifras de la pobreza en América Latina: *¿por qué no ha habido un estallido social generalizado en el campo en estos años de neoliberalismo?*

que la magnitud oficial de la misma en los territorios que conforman la ruralidad latinoamericana es impresionante. Y, además, las dos décadas de implementación de políticas agrarias y rurales de carácter neoliberal (que entroncan perfectamente con el devenir de las políticas macroeconómicas aplicadas), han comportado un aumento tanto en términos absolutos como relativos de la pobreza. En 1980 el número de pobres en los espacios rurales de América Latina era de 73 millones, lo que representaba el 60,9% de la población total; casi dos décadas después, en 1999 el volumen de ciudadanos pobres ha ascendido hasta los 77,2 millones, que suponen como ya hemos señalado el 63,7% de los residentes. Pero es más, el número de indigentes ha pasado de 39,9 millones en 1980 a 46,4 millones en 1999. Es verdad que las cifras indican una relativa mejora en los años más recientes, aunque pensamos que la difícil situación que han vivido algunos países latinoamericanos en el bienio 2001-2002, debe haber llevado a que la pobreza haya aumentado de nuevo. En todo caso, esta información demuestra a nuestro modo de ver que el modelo de desarrollo capitalista de la agricultura asumido y fomentado por los diversos gobiernos de América Latina —con el apoyo y aquiescencia de instituciones y organismos internacionales— ha tenido como consecuencia directa un incremento de la pobreza en el medio rural. Si bien no disponemos de datos sobre Haití, que seguro nos hablarían de proporciones de pobreza rural muy elevadas, en Honduras en 1999 el 86,3% de la población rural era oficialmente pobre (en Ecuador era del 86% en el 2000), índice que alcanzaba el 80,7% en Bolivia, el 77% en Nicaragua, el 73,9% en Paraguay, el 70% en Guatemala, el 61,8% en Colombia, el 61% en Perú —esta cifra es de 1997—, el 58,5% en México y el 55,3% en Brasil. En cambio, los valores más reducidos se lograban en Chile con un porcentaje de población pobre rural del 23,8% y en Costa Rica con un 22,3% (situación que creemos también sucede en Uruguay, aunque no tenemos información cuantitativa al respecto).

Ante esta situación en América Latina, la principal estrategia para salir de la pobreza asumida por muchos campesinos y sus familias, de igual modo que por numerosos pobladores rurales, es la *emigración*. Teniendo en cuenta los datos de población de 1990 y del 2000, y los valores medios nacionales de crecimiento vegetativo de igual período, podemos estimar a *grosso modo* que el saldo migratorio de las áreas rurales del conjunto de la región ha sido en esta última década de aproximadamente 23,2 millones de personas (destacando el saldo negativo de los espacios rurales brasileños que alcanzó los -10,2 millones de personas, México con -3,3 millones, Argentina -1,1 millones, Colombia -1,9 millones o Perú con -977.000). Movimientos migratorios que han tenido —y tienen— cuatro direcciones principales: a) a zonas de nueva colonización generalmente dentro del mismo país —en estos casos habitualmente se sigue manteniendo la actividad agropecuaria—; b) a pequeñas y medianas ciudades relativamente próximas al núcleo rural en el que se reside —implica muchas veces, aunque no siempre, un cambio de trabajo—; c) hacia las grandes ciudades y áreas metropolitanas —comporta la búsqueda de otro trabajo en la industria, la construcción, el comercio y los servicios, o pasar a engrosar las filas de la economía informal—; y, d) emigrar hacia otros países —bien entre distintas naciones latinoamericanas, o bien, opción mayoritaria, hacia los Estados Unidos y Europa. La función esencial que la emigración desempeña como mecanismo de ingresos de divisas en muchas naciones latinoamericanas —y como mecanismo de aminoración de la presión demográfica sobre el empleo—, comporta que ésta se

produzca con el beneplácito de casi todos los gobiernos latinoamericanos. Hecho al que se suma, claro está, la necesidad de abaratar los mercados laborales en los países capitalistas centrales, lo que facilita sin duda la *atracción/coptación* de estos miles de ciudadanos latinoamericanos.

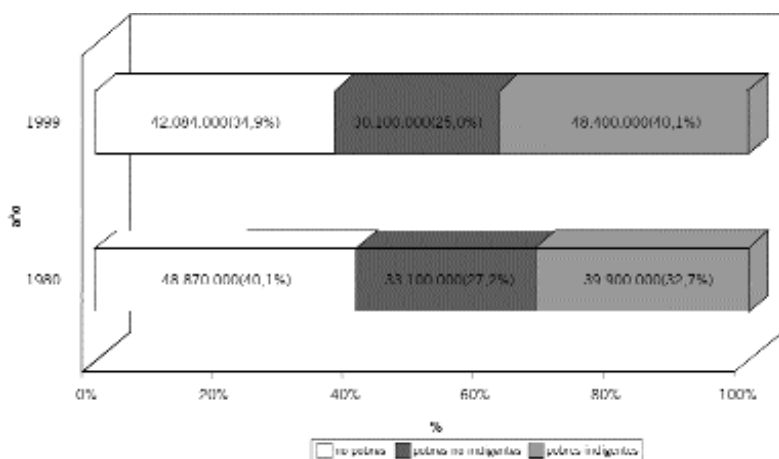


FIGURA 3
Evolución de la pobreza en las áreas rurales latinoamericanas en la era del ajuste estructural neoliberal (1980-1999).

Fuente: CEPAL (2001), Panorama social de América Latina, 2000-2001, Santiago de Chile. Los datos suman los valores de 19 países, y se han realizado sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de esos 19 países. Estos países agrupan a más del 90% de la población latinoamericana.

A modo de conclusión

Este primer esbozo de balance del impacto de la globalización en el sector agrario latinoamericano —concretado en el famoso ajuste estructural— nos ha permitido mostrar como pese a las reformas introducidas en las políticas agrarias (o como consecuencia de las mismas), reflejo de las propias reformas neoliberales de las políticas económicas generales desenvueltas estas décadas, los diversos índices que construyen el rostro de este sector ponen de manifiesto que los desequilibrios estructurales, la injusticia social, las disparidades territoriales y la dependencia del capital y de la tecnología externa siguen siendo los elementos nucleares que lo definen. Todo lo cual ha conducido a consolidar una agricultura dual. En la cual, de un lado están una multitud de pequeñas explotaciones familiares, con realidades estructurales muy poliédricas y con niveles de inserción en el mercado muy dispares, pero que se caracterizan en última instancia por disponer de unas ratios de productividad y de bienestar social muy bajos; y, de otro lado, unas pocas pero grandes explotaciones ligadas al gran comercio urbano interno o al comercio internacional de materias primas agrarias —ligazón vehiculada a través de sus relaciones con las empresas agroindustriales—, que cada vez más concentran los recursos y los medios de producción, así como cuentan con un mayor acceso al capital, a los avances tecnológicos y a la información.

Un buen reflejo de esta situación y del propio desempeño del sector agrario en estos años de égida neoliberal, lo podemos vislumbrar a través de tres hechos. En primer lugar, recordemos que en el año 1980 la productividad (uno de los criterios más utilizados y

queridos por los diferentes organismos internacionales y por los defensores del neoliberalismo) de la agricultura latinoamericana era de 1.782 dólares, mientras que casi veinte años después, en 1999 se llegaba a los 2.474 \$. Ha crecido sin duda, pero vale la pena recordar que ese mismo índice en 1999 ascendió a 20.556 \$ en la Unión Europea y a los 41.627 \$ en los EE.UU., mostrando en ambos casos incluso un mayor ritmo de crecimiento en los últimos años que el del propio agro de América Latina. En segundo lugar, es cierto que el saldo comercial de los bienes agroalimentarios y forestales es positivo y muy considerable en América Latina, con un monto total en el año 2000 de 18.887 millones de \$ —sin incluir la pesca—, pero no lo es menos que progresivamente se está desarrollando una significativa penetración de productos que provienen de fuera de Latinoamérica (de los Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea o Asia). Ese coste de la globalización implica, pues, que si en el año 1961 las importaciones de estos bienes representaban el 28,7% del valor de las exportaciones, en el año 2000 lograban ya el 66,3%. Y, en tercer lugar, si focalizamos nuestra atención en el conjunto del mundo rural —un territorio que como hemos visto se dedica mayoritariamente a la agricultura— podemos comprobar que si en 1980 la proporción de población pobre era en América Latina y el Caribe del 60,6%, en 1999 ese índice alcanzó el 63,7% —multiplicando por seis las ratios europeas de pobreza rural, por ejemplo, aunque paradójicamente el campo europeo reciba abundantes ayudas públicas y en el latinoamericano éstas sean prácticamente inexistentes.

En definitiva, como principal conclusión de este estudio hemos de poner de manifiesto que estas dos décadas de aplicación de las políticas neoliberales en el sector agrario de América Latina —hemos hecho hincapié en este aspecto dado que consideramos que la evolución de dicho sector viene claramente determinada en última instancia por la implementación de tales medidas políticas—, aún reconociendo la extraordinaria pluralidad de situaciones que engloba la realidad latinoamericana, han patentizado que, por una parte, es cierto que se ha producido un crecimiento de la actividad, un incremento de la productividad y un aumento considerable de las exportaciones agropecuarias y forestales (desempeño positivo que en muchos casos se ha focalizado en las grandes explotaciones agrarias). Pero, por otra parte, y en el fondo de manera lógica con el modelo de desarrollo elegido, han constatado que la abrumadora mayoría de los agricultores no se han beneficiado significativamente de esas circunstancias, antes al contrario, la mayoría de los agricultores familiares y gran parte de los agricultores asalariados siguen estando bajo los parámetros de una actividad infracapitalizada, poco productiva, nada rentable y sin casi ningún apoyo de la administración, lo que les conduce indefectiblemente al empobrecimiento generalizado. Son, en fin, las dos caras de una misma moneda.

Agraïments

Aquest treball s'inclou en projecte de recerca BSO 2000-1085 del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Bibliografía

- AA.VV. (2001), *Una década de luces y sombras en América Latina y el Caribe en los noventa*, Santiago de Chile: CEPAL.
- APPENDINI, K. (1992), *De la milpa a los tortibonos. La reestructuración de la política alimentaria en México*, México DF: El Colegio de México.
- BARRACLOUGH, S. (1973), *Agrarian structure in Latin America*, Lexington: DC Heath.
- BARKIN, D. (2001), "Superando el paradigma neoliberal: desarrollo rural sustentable", en Giarraca, N. (comp.), *¿Nueva Ruralidad en América Latina?*, Buenos Aires: CLACSO. 81-99.
- BRETÓN, V. (1994), *¿La tierra para quién la trabaja? Reforma agraria, desarrollo rural y crisis del campesinado en América Latina, 1950-1990*, Série Espai i Temps 21, Lleida: Universitat de Lleida.
- (1999), "Del reparto agrario a la modernización excluyente: los límites del desarrollo rural en América Latina", Bretón, V.; García, F.; Roca, A. (eds.), *Los límites del desarrollo. Modelos "rotos" y modelos "por construir" en América Latina y África*, Barcelona: Editorial Icaria. 296-338.
- BULMER-THOMAS, V. (1996), *The new economic model in Latin America and its impact on income distribution and poverty*, Macmillan, Londres: ILAS.
- (1998), *La historia económica de América Latina desde la independencia*, México DF: FCE.
- BURKE, S.; PERRY, G. F. (1998), *La larga marcha: una agenda de reformas para la próxima década en América Latina y el Caribe*, Washington DC: Banco Mundial.
- CALDERÓN, F.; CHIRIBOGA, M.; PIÑERO, D. (1992), *Modernización democrática e incluyente de la agricultura en América Latina y el Caribe*, San José de Costa Rica: IICA.
- CEPAL (2002), *Panorama de la agricultura de América Latina y el Caribe, 1990-2000*, Santiago de Chile.
- CHONCHOL, J. (1995), *Systèmes agraires en Amérique Latine. Des agricultures préhispaniques à la modernisation conservatrice*, París: Editions de l'IHEAL.
- DAVID, M. B. A.; DIRVEN, M.; VOGELGESANG, F. (2000), "The impact of the new economic model on Latin America's agriculture", *World Development* 28 (9), 1673-1688.
- DE JANVRY, A. (1981), *The Agrarian question and reformism in Latin America*, Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- (1994), "Social and economic reforms: the challenge of equitable growth in Latin America agriculture", MUCHNIK, E.; NIÑO, A. (eds.), *Apertura económica, modernización y sostenibilidad en la agricultura*, Santiago de Chile: ALACEA.
- DE JANVRY, A. et al. (1989), *Rural development in Latin America: an evaluation and proposal*, San José de Costa Rica: IICA.
- (1997), *Mexico's second agrarian reform*, Berkeley: University of California.
- DE JANVRY, A.; SADOULET, E.; THORBECKE, E. (eds.) (1995), *State, market and civil organizations. New theories, new practices and their implications for rural development*, Londres: Macmillan.

- DEININGER, K. (2000), "Efectuar una reforma agraria asistida por el mercado. La experiencia inicial de Colombia, Brasil y Sudáfrica", LUTZ, E. (comp.), *Agricultura y medio ambiente. Perspectivas sobre el desarrollo rural sostenible*, Washington DC: Banco Mundial. 159-175.
- DORNER, P. (1992), *Latin American land reforms, in theory and practice. A retrospective analysis*, Madison: The University of Wisconsin Press.
- ESCALANTE, R. (2001), *El mercado de tierras en México*, Santiago de Chile: CEPAL.
- GARCÍA PASCUAL, F. (coord.), *El mundo rural en la era de la globalización: incertidumbres y potencialidades*, Lleida - Madrid: Universitat de Lleida i MAPA.
- GIARRACA, N. (comp.) (2001), *¿Una nueva ruralidad en América Latina?*, Buenos Aires: CLACSO.
- GODDMAN, D.; REDCLIFT, M. (1982), *From peasant to proletarian: capitalist development and agrarian transition*, Oxford: Basil Blackwell.
- GREEN, D. (1995), *Silent revolution. The rise of market economies in Latin America*, Londres: Casell.
- GROPPPO, P. (1997), "La FAO y la reforma agraria en América Latina: hacia una nueva visión", *SDdimensions* núm. mayo, 1-6.
- HEWITT DE ALCÁNTARA, C. (comp.) (1992), *Reestructuración económica y subdesarrollo rural. El maíz y la crisis de los ochenta*, México DF: El Colegio de México.
- KAY, C. (1998), "¿El fin de la reforma agraria en América Latina? El legado de la reforma agraria y el asunto no resuelto de la tierra", *Revista Mexicana de Sociología*, 60 (4), 61-98.
- (1999), "Rural development: from agrarian reform to neoliberalism and beyond", GWYNNE, RN.; KAY, C. (eds.), *Latin America Transformed. Globalization and modernity*, Londres: Arnold. 272-304.
- (2001), "Los paradigmas de desarrollo rural en América Latina", GARCÍA PASCUAL, F. (coord.), *El mundo rural en la era de la globalización: incertidumbres y potencialidades*, Lleida - Madrid: Universitat de Lleida i MAPA. 337-429.
- LEHMANN, D. (1978), "The death of land reform: a polemic", *World Development*, 6 (3) 329-345.
- LONG, N.; ROBERTS, B. (1997), "Las estructuras agrarias en América Latina, 1930-1990", BETHELL, L. (ed.), *Historia de América Latina. 11. Economía y Sociedad desde 1930*, Cambridge University Press, Barcelona: Crítica. 278-334.
- LLAMBÍ, L. (1993), "Reestructuración mundial y sistemas agrolimentarios. Necesidad de nuevos enfoques", *Comercio Exterior*, 43, 3, marzo. 257-265.
- MURMIS, M. (1994), "Incluidos y excluidos en la reestructuración del agro latinoamericano", *Debate Agrario* 18, 101-133.
- RUBIO, B. (2001), *Explotados y excluidos. Los campesinos latinoamericanos en la fase agro-exportadora neoliberal*, México DF: Plaza y Valdes Editores.
- SEN, A. (2000), *Un nouvel modèle économique. Développement, justice et liberté*, París: Odile Jacob.
- SERAGELDIN, I.; JOHNSON, I. (2000), "Prólogo", LUTZ, E. (comp.), *Agricultura y medio ambiente. Perspectivas sobre el desarrollo rural sostenible*, Washington DC: Banco Mundial.

- SHEARER, E. *et al.* (1991), *The reform of rural land markets in Latin America and the Caribbean: research, theory and policy implications*, Land Tenure Center Paper 41, Madison: University of Wisconsin.
- SPOOR, M. (2000), *Two decades of adjustment and agricultural development in Latin America and the Caribbean*, Santiago de Chile: CEPAL.
- STIGLITZ, J. E. (2002), *El malestar de la globalización*, Madrid: Taurus.
- THIERRY, L. (comp.), *Agricultura y campesinos de América Latina. Mutaciones y recomposiciones*, México DF: FCE.
- THIESENHUSEN, W. H. (1989), *Searching for agrarian reform in Latin America*, Winchester: Unwin Iman.
- URIESTE, M. (2001), *Bolivia: reform and resistance in the countryside (1982-2000)*, Occasional Papers 23, Institute of Latin America Studies, Londres: University of London.
- VELTMEYER, H.; PETRAS, J.; VIEUX, S. (1997), *Neoliberalism and class conflict in Latin America*, Londres: Macmillan.
- VOGELGESAN, F. (2000), *Pavimentando el otro sendero: tierras rurales, el mercado y el Estado en América Latina*, Santiago de Chile: CEPAL.
- WEEKS, J. (ed.) (1995), *Structural adjustment and the agricultural sector in Latin America and Caribbean*, Londres: Macmillan.
- ZAMOSC, L.; MARTÍNEZ, E.; CHIRIBOGA, M. (comp.) (1996), *Estructuras agrarias y movimientos campesinos en América Latina, 1950-1990*, Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Resum:

L'agricultura llatinoamericana en el temps de la globalització i de les polítiques neoliberals: un primer balanç.

En aquest treball posem de manifest que l'agricultura a Amèrica Llatina i el Carib ha mostrat una doble cara en termes de la seva evolució en aquestes dues darreres dècades, coherentment amb la lògica del sistema. D'una banda, en alguns territoris i en alguns subsectors s'han produït avenços tant en termes de llur "modernització" —és a dir, capitalització— de l'aparell productiu com en llur inserció en el mercat urbà intern i en el mercat internacional. I, d'altra banda, si observem detingudament els principals índexs que mesuren els resultats de l'activitat agrària —productivitat, balança comercial, preus implícits en la producció i en l'exportació o nivell d'ingressos dels agricultors— podem comprovar feiaentment que la distància que ha separat històricament a l'agricultura llatinoamericana dels sectors agraris dels Estats Units o de la Unió Europea és cada cop més gran. És més, els grans problemes que dominaven el món agrari a Amèrica Llatina a principis dels anys vuitanta (baixa productivitat, distribució desigual dels recursos productius, exclusió social, desequilibris territorials, a més de la dependència tecnològica i de la dependència financera del sector) segueixen sent la realitat majoritària després de dues dècades d'ajustament estructural neoliberal.

PARAULES CLAU: *agricultura, ajustament estructural, Amèrica Llatina, desenvolupament.*

Abstract:

Latin-American agriculture in an age of globalisation and neo-liberal policies: some considerations.

In this work, we highlight that, during the last two decades, the performance of agriculture in Latin America and the Caribbean has been showing two faces, consistently with the logical of the system. First, in some territories and sectors, there have been improvements that can be understood as “modernisation” —that is capitalisation— of the productive structure and as insertion in the both the internal urban market and the international market. By the other side, if we observe the main indicators that measure the results of the agrarian activity —productivity, trade balance, production and exportation prices, income of the peasants...—, we can check that the historical cleavage between the Latin American agriculture and those in USA or the EU is widening. More than this, the big problems that were blocking the Latin American agriculture at the beginning of the 80s (low productivity, unequal distribution of the productive resources, social exclusion, territory imbalance, technological and financing dependence...) continue to constitute the overwhelming reality of the sector after twenty years of neo-liberal structural adjustment.

KEY WORDS: *agriculture, development, Latin America, structural adjustment.*